

Santiago, doce de septiembre de dos mil veinticuatro

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada escrita a fojas 75 y siguientes, con las siguientes modificaciones:

Se eliminan los considerandos quince a dieciocho inclusive

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que el abogado MARCELO GALLARDO CAMUS, en representación del demandante, CRISTIÁN VIAL LE BEUFFE, dedujo recurso de apelación, en contra de la sentencia de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la juez titular del 18° Juzgado civil de Santiago en los antecedentes caratulados “Vial con Zúrich Santander Seguros Generales Chile S.A.”, ROL N°9261-2020, **ingreso I. Corte rol 4778-22 civil**, sobre cumplimiento de contrato de seguros, fundamentándose en que su parte demandó el cumplimiento de un contrato de seguros en contra de la Compañía de Seguros Zúrich Santander Seguros Generales Chile S.A., sobre protección de daños a causa de todo tipo de fraudes según lo descrito en la respectiva póliza, solicitando al afecto que se ordenara a la demandada el cumplimiento de su obligación de indemnizar el siniestro sufrido por su parte día 21 de noviembre de 2019, al haber sido víctima de un fraude bancario, de aquellos cometido vía telefónica, solicitando al efecto el pago del monto defraudado, correspondiente a la suma de \$19.932.012.- más los intereses pagados al banco por dicha suma desde el fraude, hasta la fecha de interposición de la demanda, como indemnización por daño emergente, lo que alcanzaba a la suma de \$669.761.-, y que sumado al daño antes indicado, alcanza a la suma total \$20.601.761.- toda vez que la compañía de seguros se negó a ello, alegando que el asegurado no había actuado con la debida diligencia, aun cuando su parte de inmediato bloqueó sus claves.

Argumenta en lo medular, que la sentenciadora no consideró que a partir de la dictación de la ley 20667 del año 2013, la concepción del seguro ha cambiado, por lo cual ya no sería aplicable el artículo 524 en su N° 4 del Código de Comercio, en el que se basa la sentenciadora para rechazar su demanda y actualmente se entiende, que las Compañías de Seguros responden de todos los perjuicios, con excepción de los expresamente excluidos, por la póliza o la ley, que hay una presunción de cobertura, debiendo aplicarse imperativamente el artículo 530 y 531 que incorpora la ley 20067, siendo el asegurador quien debe probar la exclusión y en este caso se trata de un seguro contra fraudes denominado “full fraudes” por lo cual cubre todas las defraudaciones de esta clase. Que tal como lo ha dicho la jurisprudencia, hay un traslado del riesgo al asegurador y cita el fallo de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Ingreso N° 154-2016, donde se concluye que *“Por definición y propia naturaleza, el contrato de seguro involucra la transferencia del riesgo del asegurado al asegurador, pudiendo el riesgo consistir en el acaecimiento de una negligencia del propio asegurado (...)”*,

Agrega que la norma del artículo 524 N° 4 del Código de Comercio además resulta incoherente con la disposición del artículo 535 del citado cuerpo legal según la cual solo se excluye la culpa grave y dolo del asegurado para omitir la obligación de indemnizar, señalando que “el asegurador no está obligado a indemnizar el siniestro que se origine por



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UCLXPNSVWX

dolo o culpa grave del asegurado o del tomador en su caso, salvo pacto en contrario para los casos de culpa grave”.

Segundo: Que la demandada no contestó la demanda, alegando en segunda instancia el abogado Marcelo Gallardo, quien expresó que correspondía al asegurado evitar el daño como lo señala la sentencia y que el Banco recomienda no entregar nunca las claves ni las coordenadas y que dicha institución nunca las solicitará por teléfono. Que los hechos ratifican la falta de cuidado del asegurado, quien siendo abogado no actuó como un buen padre de familia, razón por la cual se rechazó su demanda. Indica que aun habiendo contestado la demanda fuera de plazo, ésta se rechazó en base a que el mismo demandante entregó las claves y las bloqueó cuando el mismo se dio cuenta de que había cometido una imprudencia.

Que habría obligación de prevenir el fraude y si no se hace se incurre en un incumplimiento y que además no es irrelevante que el demandante sea abogado, ya que en tal caso conocía las normas por la cual estima que debe confirmarse la sentencia impugnada.

Tercero: Que la sentencia dando por acreditada la existencia del seguro que fundamenta la demanda, así como del siniestro cuya indemnización se reclama ocurrido el día 21 de noviembre de 2019, sin que se discute el cumplimiento por parte del beneficiario del seguro de las restantes obligaciones contractuales, al bloquear de inmediato sus claves y dar los avisos pertinentes, concluye que, de acuerdo con el Informe de Liquidación del Siniestro N° 223789, y lo dispuesto en el artículo 524 N° 4 del Código de Comercio, que aquel no es susceptible de ser

Indemnizado, dado que el asegurado habría incurrido en “una infracción a su deber de diligencia para prevenir el siniestro, al entregar en forma voluntaria las combinaciones de su tarjeta de coordenadas a terceros desconocidos, sin tomar los resguardos necesarios”, lo que estima agravado por la circunstancia de tratarse de un abogado el beneficiario y conocer sus obligaciones emanadas del contrato de seguro, según indica.

Cuarto: Que no obstante lo señalado en el artículo 524 N° 4 del Código de Comercio, el cual dispone que “*el asegurado estará obligado a emplear el cuidado y celo de un buen padre de familia para prevenir el siniestro*”, los artículos 535 y 542 del mismo Código señalan imperativamente que una compañía de seguros sólo puede negar la cobertura a un siniestro provocado por el dolo o culpa grave del asegurado, por lo que el asegurador no podía excluir de cobertura un siniestro, fundamentado en la culpa leve del asegurado.

Pues bien, la cobertura contratada por la demandante, incluye expresamente “...*los daños patrimoniales (...) que el asegurado sufra y que provengan del uso indebido o fraudulento, por parte de terceros no autorizados, de las identificaciones con las cuales el asegurado está autorizado por la Institución Bancaria o Financiera para realizar transferencias remotas de fondos desde la cuenta bancaria asegurada o línea de crédito asociada a ésta*”, como asimismo, el daño patrimonial consecuencia del mal uso de la tarjeta de crédito y las transferencias remotas efectuadas con ella, provenientes “...*del uso*



indebido o fraudulento, por parte de terceros no autorizados, de las identificaciones con las cuales el asegurado está autorizado”, entendiéndose por daño patrimonial, conforme se advierte del documento denominado “condiciones generales del seguro”, como el monto efectivo de la defraudación, añadiéndose, a continuación, que se entiende por evento, los hechos o serie de tales que ocurren durante el período de cobertura, definiendo transferencias remotas, como las pérdidas que ocurran desde la primera de ellas, no reconocida, hasta el bloqueo de los medios de identificación; mientras que, entiende por mal uso de tarjetas de crédito “...las pérdidas ocurridas desde la primera transacción ilícita, mal uso y/o defraudación hecha con la(s) tarjeta(s) de crédito protegida(s) por esta póliza, hasta su puesta en conocimiento en la institución emisora”.

Quinto: Que, por su parte, en las condiciones particulares del seguro materia de autos, se indica que la cobertura se extiende al mal uso de tarjetas de crédito y transferencias remotas de tarjeta de crédito, relativo al daño patrimonial consecuencia del robo, asalto, hurto, pérdida, extravío, uso indebido o fraudulento (entre otros) de las tarjetas como identificaciones, códigos y clave de seguridad.

A juicio de esta Corte, tales descripciones son compatibles con los hechos materia de autos, respecto los cuales, la aseguradora debe cobertura.

En efecto, el numeral 4º del artículo 524 del Código de Comercio, que establece lo que en doctrina se entiende como una carga que le corresponde al asegurado de mitigar los daños, y por lo mismo, conforme lo ha anotado la academia, no excluye la cobertura asegurada, sino más bien, permitiría, eventualmente, reducir el monto de la indemnización, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1558 del Código Civil (así lo plantea, por ejemplo, el profesor Cristán Aedo Barrera en su artículo “la naturaleza jurídica de las conductas exigidas al asegurado a la luz de la Ley N° 20.667” *Ius et Praxis* vol 24, N° 2, Talca, dic 2018), cuestión que no fue planteada en autos, procediendo, entonces, desestimar la defensa de la demandada, concediendo la cobertura solicitada, en los términos que se señalará.

Sexto: Que, por otro lado, de señalado, se desprende, además, que la culpa leve que se atribuye en este caso al asegurado está permitida y que la interpretación de las normas del contrato debe hacerse en beneficio del asegurado o beneficiario, todo lo cual nos lleva a concluir que éste tenía derecho a impetrar la indemnización que cobra en su demanda, procediendo, en consecuencia, acoger la demanda en lo solicitado.

Y visto demás, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve:**

I.- Que **se revoca** la sentencia apelada de quince de febrero de dos mil veintidós, dictada a fs. 58 y sgtes. en los antecedentes rol N°9261-2020 del 18º Juzgado civil de Santiago caratulados “Vial con Zúrich Santander Seguros Generales Chile S.A.”, y en su lugar se declara que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a fojas 1 y siguientes, en contra de Zúrich Santander Seguros Generales Chile S.A a la cual se le condena a pagar la suma total \$20.601.761 correspondiendo \$19.932.012 a indemnización por el daño emergente sufrido por la demandante al ocurrir el siniestro y la suma de \$669.761.-, por el daño emergente consistente en los intereses que debió pagar al



banco por la deuda adquirida a causa del fraude , todo ello según consta en la documental acompañada, más reajuste del IPC desde la fecha del siniestro hasta el pago efectivo de la indemnización.

II.- Que se condena en costas a la demandada.

Regístrese y devuélvase.

Redactado por la Ministro (S) señora Nelly Villegas Becerra.

N° 4778-2022 Civil.

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Carlos Farías Pino, Patricio Martínez Benavides y Nelly Villegas Becerra.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UCLXPNSVWX

Pronunciado por la Decimotercera (zoom) Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Carlos Cristobal Farias P., Patricio Esteban Martinez B. y Ministra Suplente Nelly Magdalena Villegas B. Santiago, doce de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a doce de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UCLXPNSVWX